



SUPLEMENTO ESPECIAL

30 AÑOS



Escriben:

Atilio Boron, Carlos Fidel, Horacio González, María Alicia Gutiérrez, Eduardo Jozami, Guillermo Levy, Rodolfo Livingston, Damián Loreti, María Moreno, Adrián Paenza, Adriana Puiggrós, Mario Rapoport, Alejandro Rofman, Pedro Saborido, Hugo Yasky, Raúl Zaffaroni.





CULTURA POLÍTICA

Democracia,

Por Horacio González

... *príncipe amargo del escollo* Mallarmé

Un fantasma ronda la época democrática, que no suele ser fácilmente reconocido por el político. Que nunca es posible que se realice todo a lo que aspiramos. Precisamente, el acertijo mayor de la política es que todo político sabe profundamente que esto es así, que el tiempo y la letra nunca alcanzan, pero tiene la certeza de que si lo dice perderá vigencia, revelará la falla de una débil u oscura conciencia. En algún momento, Alfonsín supo asomarse a este pensamiento después de fijar su programa máximo: con la democracia se educa, se come y se cura. Era un intento de reabsorber en la teoría democrática todas las acciones que en la sociología corriente se llamaban políticas sociales y en la política revolucionaria se consideraban ámbitos autónomos, esferas de carencia, a ser rescatadas por el cambio revolucionario.

Semejante “cambio de ejes” —para emplear terminología arcaica— precisaba un suplemento anímico mayor que el de por sí las antiguas pasiones revolucionarias ya contenían. Entonces se llamó “utopía” a

la democracia así concebida, pues era la fórmula capaz de insuflarle vida y plenipotencia social a una palabra que el elenco de frases anteriores consideraba banal.

Pero están las concesiones que tuvo que hacer ante diversos infortunios, desde ya económicos, pero, notoriamente, por las manifestaciones de fuerzas armadas del viejo orden militar. Las llamó así, “concesiones”, según el vocabulario corriente, sin llegar a decir —porque quizá no lo sabía— que más no se podía hacer. Atinó a sugerir que había límites inesperados, bien o mal definidos —...“estos hombres, héroes de Malvinas”—, límites que era problemático definir con cualquier frase que fuese, aunque esa notoriamente tenía el sabor desagradable de ser parte de una difícil negociación. La frase era también una frontera, frente a la cual no se pudo decir algo que sonar más claro: lo hago aunque no me gusta. Es el fastidio amargo del escollo, esas secretas obligaciones que son típicas de los bruscos cambios no analizados. Ese es el infortunio, tejido interno que atenta contra las posibilidades del político, su naufragio momentáneo, que vacila en admitir, a veces tomado con humor, pero que es insoluble de la democracia.

En la tradición peronista existe este reconocimiento en forma de boutade: tragar un sapo todos los días. Las páginas que Perón dedica a esta circunstancia batraciofágica presentan el tema como un acatamiento indispensable a la astucia, como un remedio frente al azar o la fortuna, que obliga a una sagaz resignación del activista, tragando en silencio la pócima amarga de lo real. ¿Debe decirlo o no? El caso del senador Pichetto puede parecer poco relevante, pero ilustra severamente sobre una de las características de estos treinta años borrascosos. El político “no debería” decir que hace una cosa diferente de la que piensa. Pero el hecho de que esto haya ocurrido, ¿no habla a favor de que lo que llamamos democracia debe ser una reflexión más profunda sobre la distancia entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad? En vez de vituperar al senador, deben bucearse allí largos síntomas de irresolución de lo que es la relación del ser político con la veracidad íntima de los convencimientos que albergamos y nos albergan. Hay que acercarlos a las cambiantes coyunturas, no alejarlos de ellas. Son el “príncipe democrático” bajo la forma de escollo declarable, sincerable, revelable.

Podríamos así definir las modulaciones de estos

Las fotografías que ilustran el interior de este suplemento fueron realizadas por Víctor Bugge, quien sumó su enorme talento al lugar privilegiado que ocupó durante los 30 años de democracia: la responsabilidad sobre las imágenes oficiales de todos los presidentes. Justamente hoy se inaugura, en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso nacional, una muestra con una selección de sus extraordinarias fotos, que reflejan sin necesidad de palabras las últimas tres décadas de la vida nacional.

(Las fotos de portada de los sucesivos traspasos presidenciales fueron distribuidas por la agencia DyN.)



infortunio, globalización

treinta años de democracia como una continuidad salutar, aunque problemática, definida en realidad por sus muchas discontinuidades y tropiezos. Especialmente en el tema de los estilos políticos respecto de cómo reconocer la debilidad de fuerzas ante la operación de los “factores” adversos internacionales. Pululan los adversarios encubiertos, grandes empresas, fuerzas económicas mundiales, organismos financieros planetarios. El mundo está “globalizado” (la palabra encierra tanta trivialidad como capacidad de impregnar la época entera) y eso supone una velocidad de circulación de mercancías, flujos financieros, ilegalidades, imágenes universales coactivas en triple play, teoría de la infor-

mación, experiencias manipuladoras de clonación, proyectos de vigilancia total, cárteles entrelazados con policías y organizaciones políticas, desconocimiento del carácter no renovable de la naturaleza por parte de capitalismos depredadores, modelos humanos producidos por una fábrica homogenizadora de sensibilidades, vulgares hedonismos, mercantilización de los placeres, la fruición cultural industrializada, el cautiverio invisible de la experiencia humana.

¿Qué deben hacer los gobiernos democráticos frente a ello? ¿Podemos ya tener una respuesta madura en nuestro país? En primer lugar, habría que reconocer más específicamente esas fuerzas ciclópeas, con nuevas cautelas aunque no con ausencia de decisiones. Es preciso introducir mayores virtudes filosóficas extraídas de las viejas raíces humanistas en el horizonte neodesarrollista que abruma incluso los momentos de cambio más decididos. La cautela lleva a una suerte de realismo crítico, que permite que las necesarias readecuaciones se constituyan en una plástica conversacional y discursiva de los gobiernos, para evitar que la política parezca ser un desfile de “etapas o segmentos” que emergerían por decreto. Las mutaciones o renovaciones deben ser explicadas estoicamente, con el sentimiento de que no nos hu-

biera gustado que ocurrieran, que se hubiera preferido no hacerlo, que no se esperaba la aparición de contradictores tan vigorosos que insinuarían su perdón si ahora nos asociamos a ellos. El sentimiento que debe generarse es un actuar en medio del escollo, el atascadero.

El reconocimiento de las fuerzas antagónicas debe ser descripto y tratado como una tensión dramática que las haga popularmente visibles. Son muy importantes los gestos silenciosos –todos los entendemos–, pero más importante es el habla del político que debe mostrar su valiente congoja y, como recomendaba el maestro Max Weber, saber decir “a pesar de todo”. Explicitar las mudanzas no como un adosamiento automático a nuevas etapas, sino con un soplo de disconformidad que la sociedad perciba. La democracia no es una ninfa permanente sino un trato crítico con una época, aunque sin dejar de invocarla o considerarla en sus límites. En estos treinta años, no hicimos sino debatir sobre si actuar como vástagos de una etapa (modernizadores globalizantes que disimulan su infortunio) o en intersticios abrumados que aún permiten que nos movamos con autonomía ante poderes mundiales que colisionan entre sí. ¿No es hora de definir este debate?

Nunca es posible que se realice todo a lo que aspiramos. Todo político sabe que esto es así, pero tiene la certeza de que si lo dice perderá vigencia.

DERECHOS HUMANOS



El legado

Por Eduardo Jozami

En diciembre de 1990, una nutrida movilización repudió los indultos decretados por el presidente Menem. El entusiasmo militante, habitual en los actos de derechos humanos, parecía esta vez algo forzado. Se advertía la bronca contra el gobernante que sacaba de las cárceles a los condenados por el Juicio a las Juntas, pero un dejo de tristeza en muchos rostros —el recuerdo más perdurable de aquel día— mostraba que había conciencia de lo difícil que sería remontar otra vez el camino. Podía pensarse que estábamos en el final de un ciclo.

En vísperas de ese acto, un grupo de militantes decidimos renunciar al Partido Justicialista como expresión de repudio: las diferencias con el menemismo ya eran notorias, pero el indulto vulneraba un límite ético que no podía ser traspasado. Ese y otros gestos tuvieron alguna repercusión, pero las cosas parecían ordenarse en el sentido deseado por el desaprensivo presidente. La derrota de Seineldín y los carapintadas sublevados permitía un control de la fuerza militar que nunca había tenido Alfonsín y, poco después, la implantación de la convertibilidad generaría un clima de estabilidad que alejaba el fantasma de las dos hiperinflaciones recientes.

Menem había recorrido Europa en 1989, el año de la caída del Muro de Berlín y del bicentenario de la Revolución Francesa, ocasión que fue propicia para proclamar el fin de esa y de todas las revoluciones. Según el balance de su viaje que hizo el presidente, en todo el mundo se buscaba dejar atrás las contradicciones ideológicas, se vivía una hora de reconciliación. Desde el primer momento, el riojano había tenido gestos inequívocos en ese sentido, cuando incorporó a su gobierno a Alvaro Alsogaray y corrió a abrazar en su lecho de enfermo al máximo referente histórico del antiperonismo, el almirante Isaac Rojas. La repatriación de los restos de Juan Manuel de Rosas, tema de grandes divergencias durante un siglo, parecía confirmar esa voluntad de reconciliación. En ese contexto fueron sancionados los indultos, que incluían, también, a integrantes de las organizaciones

guerrilleras que, en su momento, habían sido procesados siguiendo el criterio de rechazo a las dos violencias sostenida por el gobierno alfonsinista.

El movimiento de derechos humanos mantuvo siempre sus reclamos y movilizaciones, pero quienes concurríamos a ellas teníamos derecho a dudar de si esa obstinada minoría podría convocar a la mayoría social necesaria para revertir el camino de impunidad. La aparición de la Agrupación H.I.J.O.S., en 1995, postulándose como relevo natural del movimiento de familiares, y la magnitud de la movilización por los veinte años del golpe, pusieron en evidencia un lento proceso de acumulación de voluntades y, también, el deterioro del consenso, que en los primeros años había logrado la política menemista. Las declaraciones de Scilingo reconociendo los vuelos de la muerte y la autocrítica del general Balza mostraron —cualquiera sea la valoración que se haga de los motivos del comandante en jefe— hasta qué punto se hacía difícil mantener el olvido sobre los crímenes de la dictadura.

Hacia finales de la década del '90 se registraron avances significativos. Los procesamientos en el exterior generaron una fuerte solidaridad internacional y los juicios de la verdad, aunque desprovistos de la posibilidad punitiva característica del proceso penal, permitieron que se conocieran los testimonios que conmovieron a muchos y contribuyeron a hacer intolerable la situación de impunidad. Algunos proyectos legislativos impulsaron sin éxito la derogación de las leyes de punto final y obediencia debida. Mientras,

La aparición de H.I.J.O.S. y la movilización por los veinte años del golpe pusieron en evidencia un lento proceso de acumulación de voluntades.

en la ciudad de Buenos Aires y en otros lugares se proponían homenajes que rompían con el tácito pacto de silencio sobre la militancia de los '70 (impuesto en los albores de la democracia), se proyectaba la creación de museos de la memoria o de monumentos como el que hoy se eleva en la costa del Río de la Plata. Películas y textos que compilaban experiencias militantes contribuyeron a avivar el interés por conocer lo ocurrido en los años de plomo y aportaron también a fortalecer la demanda de justicia.

Este nuevo contexto no fue suficiente para que el gobierno de la Alianza, a comienzos del siglo, avanzara en lo más mínimo en relación con la demanda de justicia. Esta pervivencia de la impunidad fue otro de los factores que incidieron en el severo desprestigio de la política que se expresó en las jornadas del 2001. Sin embargo, aunque eran cada vez más los que reclamaban el fin de la impunidad, no se veía cómo la política podía hacerse cargo de esta demanda. Viendo lo que ocurrió después, es fácil concluir que la derogación de las leyes sólo podía pensarse en el marco de un proyecto más global de transformaciones, como el protagonizado por los presidentes Kirchner desde 2003.

Las primeras declaraciones de Néstor Kirchner sorprendieron al movimiento de derechos humanos, habituado a desconfiar de los dirigentes políticos, mucho más si provenían de los partidos tradicionales. Pero, cuando al discurso del 25 de Mayo le sucedieron gestos como el retiro del cuadro de Videla en el Colegio Militar o el anuncio de la recuperación de la ESMA como espacio de memoria, ese escepticismo inicial se transformó en el más entusiasta de los apoyos. Algunos, sin embargo, creyeron que debían prevenir el riesgo de la cooptación de los organismos por el Gobierno, sin advertir que ningún principio de autonomía de las organizaciones sociales podía justificar que no se apoyaran las medidas que el movimiento de derechos humanos venía reclamando desde el comienzo de la democracia y al gobierno que se hacía cargo de ese legado. Hoy, las políticas de memoria, verdad y justicia constituyen uno de los grandes logros de estos treinta años y el sello identificatorio del proceso político iniciado en 2003.

CAMBIOS INSTITUCIONALES

Avances y temas pendientes

Por Eugenio Raúl Zaffaroni

Sin duda que lo más importante institucionalmente en estos treinta años ha sido que un presidente electo mayoritariamente ha sucedido a otro y las dificultades que hubo se resolvieron dentro de la legalidad y por mayoría parlamentaria. Esta es la mejor noticia de las tres últimas décadas.

En cuanto a cambios institucionales, es destacable que la reforma constitucional de 1994, con todos sus defectos, pasó en limpio una situación confusa: hay un texto que fue aprobado por una asamblea en la que participaron todas las fuerzas políticas, lo que da por superada una derogación por bando militar, una reforma introducida por una asamblea no convocada por el Congreso y elegida con el partido mayoritario proscripto, una reforma temporal por acto “de facto” y otras irregularidades.

El mayor mérito de esa reforma fue la incorporación de los instrumentos de derechos humanos con jerarquía constitucional. En otros aspectos institucionales, todo quedó a medio hacer y nos ha provocado serios problemas (la naturaleza de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, que no deja en claro que sea una provincia; la integración del Consejo de la Magistratura, etc.). Tampoco se suprimieron cláusulas obsoletas que, si bien no tienen vigencia, empañan el texto (el racismo de la “inmigración europea”, las condiciones para ser senador, etc.).

En el orden legislativo no pueden dejar de mencionarse las leyes que destrabaron el divorcio (impulsada por la primera Corte Suprema constitucional), la eliminación del servicio militar obligatorio, la de matrimonio igualitario, la de Identidad de Género, la Asignación Universal por Hijo, el voto optativo desde los 16 años, la mayoría de edad a los 18 años, la ley de medios audiovisuales, etcétera.

Se derogó el Código de Justicia militar, con la discutida “ley marcial”, con pretexto de la cual se cometieron muchas aberraciones a lo largo de más de un siglo, y se dio a los soldados argentinos el derecho de defensa, antes prácticamente negado. Se derogó

con esto la última previsión de pena de muerte, pasando a contar la Argentina entre los países con legislación abolicionista, como la gran mayoría de las democracias asentadas.

En el orden local se derogaron los famosos “edictos”, que daban lugar al control policial más arbitrario imaginable en la Ciudad de Buenos Aires.

El Congreso y el Poder Judicial destrabaron los procesos por crímenes de lesa humanidad, obstaculizados por las leyes de amnistía y los indultos incons-

penal, hasta hace pocos años burlado con el pretexto de una supuesta imposibilidad de revisión de los “hechos”. Se declaró la inconstitucionalidad de la reclusión accesoria por tiempo indeterminado, resabio legal de la pena en Ushuaia.

Queda mucho por hacer. En principio, en cuanto al Poder Judicial, cabe observar que se rige por un decreto-ley “de facto”. Es necesario un código judicial moderno y racional. Por otra parte, el Consejo de la Magistratura permanece trabado; es urgente

una nueva organización que permita su funcionamiento.

En cuanto a la materia penal hubo una regresión, con leyes inconsultas que destruyeron el viejo y hasta cierto punto sabio código de 1921. Es urgente un Código Penal ordenado, que brinde seguridad jurídica. Hoy ni siquiera sabemos cuál es el máximo de la pena de prisión y hasta hay tribunales que sostienen que aún existe la pena de reclusión.

No se ha concretado una nueva legislación penal de niños y adolescentes: es menester acabar con la ideología tutelar para los menores de 16 años y adecuar la ley a la Constitución, como también derogar la posibilidad de aplicar la pena del adulto al menor

entre 16 y 18 años.

No se concretó la despenalización del consumo de tóxicos prohibidos, lo que permite que las policías disimulen su inactividad frente al narcotráfico desperdiciando esfuerzos inútiles en un campo propicio a la extorsión.

No se han pensado nuevos modelos de policía, seguimos con la idea de ocupación territorial del siglo XIX, poco matizada.

Se está discutiendo un nuevo Código Civil y Comercial, lo que es de fundamental importancia: se trata de la columna vertebral del derecho privado, que regula actos de la vida desde antes del nacimiento hasta después de la muerte.

El esfuerzo institucional ha sido grande, pero no hay que bajar los brazos y solazarse con lo hecho. Siempre que se empuja hacia adelante, no faltan los que esperan el resuello para detener el avance y, si pueden, para volver al pasado.



titucionales. Con dificultad, pero con seguridad, se pusieron en marcha los procesos y se está penando a los culpables. Somos el único país que lo está haciendo por aplicación de las leyes ordinarias y por medio de los jueces naturales.

Se resolvió por vía jurisprudencial el complejo tema heredado del “corralito”. Por la misma vía se hizo efectivo el derecho a la doble instancia en materia

El esfuerzo institucional ha sido grande, pero no hay que bajar los brazos y solazarse con lo hecho.



DEUDA EXTERNA

Un palo en la rueda de la democracia

Por Mario Rapoport *

La deuda externa es un fenómeno que cabalga buena parte de la historia económica argentina. Desde los primeros años de vida independiente los créditos fueron acumulándose y con ellos las dificultades de pago. Problemas fiscales y endeudamiento externo han ido entrelazándose y potenciándose de manera recíproca provocando sucesivas crisis. Los ciclos económicos internacionales tuvieron en él un mecanismo principal de transmisión, donde generalmente se combinaron plétores de capitales disponibles en los países centrales en busca de mayores rentabilidades y críticas coyunturas locales. Siguiendo un círculo perverso, en cada renegociación los acreedores, y los organismos internacionales que les servían, imponían políticas de ajuste cuyo objetivo era el de permitir el pago de deudas anteriores, de manera que los créditos que debían servir para suplir la falta de capital interno para el desarrollo terminaron convirtiéndose de manera invariable en un obstáculo mayúsculo para ese propósito.

La calidad de la democracia se mide no sólo por lo político, sino también por sus instituciones, sus logros económicos y su mayor grado de inclusión social, y tiene directa relación con los condicionamientos que presenta el endeudamiento externo. En 1983, la democracia renació pero el peso de la

deuda contraída por la dictadura militar fue un factor que trabó el desarrollo futuro. El endeudamiento legado por la dictadura era de 45 mil millones de dólares, cinco veces superior a las exportaciones anuales, y al momento de la asunción de Alfonsín, existían 20 mil millones de dólares de atrasos en los pagos. El esfuerzo comercial no resultaba menor al fiscal, dado que el Estado había absorbido los pasivos privados, proceso que se prolongó durante el gobierno radical.

La nueva administración intentó al principio renegociar la deuda sin ahogar el crecimiento, pero la intransigencia de los principales acreedores, la magnitud del esfuerzo económico involucrado y la falta de firmeza política deterioraron esa estrategia. La ilegitimidad de parte de la deuda no estuvo cuestionada, mientras que el ajuste a fin de obtener

En 1983, la democracia renació pero el peso de la deuda contraída por la dictadura militar fue un factor que trabó el desarrollo futuro.

el saldo comercial y fiscal necesario fue enorme y no tuvo éxito. El Plan Austral y el Plan Primavera fracasaron. La hiperinflación coronó el ocaso de un régimen acosado por las debilidades propias, la oposición política y de las corporaciones y la creciente dureza de acreedores y organismos financieros multilaterales.

Luego de la entrega anticipada del mandato presidencial, con una deuda externa de 60 mil millones de dólares, se consolidó un modelo que con idas y vueltas venía fortaleciéndose desde 1976, comandado por los grandes grupos económicos ligados al capital transnacional. En 1992, la Argentina ingresó al Plan Brady, una reestructuración de la deuda con aval del Tesoro de los Estados Unidos. Gran parte de la deuda reestructurada, unos 38 mil millones de dólares, cotizaba a un valor muy inferior al nominal, y pudo haber sido rescatada por el gobierno, que sin embargo optó por beneficiar a la banca extranjera hipotecando los ingresos futuros. Esta regularización de deuda argentina vino acompañada por la implementación de la Ley de Convertibilidad con un tipo de cambio inamovible de un peso por un dólar. Se procuró volver así a los mercados de capitales internacionales con la intención de acelerar la toma de deuda externa, pública y privada, pero su incidencia en expandir la producción fue magra. La apertura externa y la liberalización económica interna





contribuyeron a incentivar la especulación, a financiar cuantiosos saldos negativos en la balanza comercial y en la cuenta corriente y a otra fuerte fuga de capitales.

Los intereses pesaban cada vez más en las cuentas públicas, a su vez melladas por la privatización de la seguridad social, que redujo cerca de un diez por ciento anual los ingresos del Estado. Luego de la crisis de México, en 1994, el problema del endeudamiento se agravó. Las privatizaciones y ventas de los principales activos públicos no habían contribuido a remediar la situación y sí a perder el control de la economía. La sobrevaluación del peso abarataba los bienes importados y dañaba la competitividad de las exportaciones: la dependencia de los préstamos internacionales fue cada vez mayor. El endeudamiento terminó constituyendo casi la única fuente de divisas. La deuda externa bruta, pública y privada, representaba ya casi seis veces las exportaciones anuales argentinas.

A la vuelta del siglo, con el nuevo gobierno de la Alianza se eligió una profundización del ajuste como la única alternativa para tratar de mantener la convertibilidad y el pago de la deuda, aplicando medidas como un aumento de impuestos a los sectores medios, la rebaja de salarios y jubilaciones o la ley de flexibilización laboral, pero esto redujo la demanda interna y agravó la situación. La acelerada

salida de depósitos y fuga de capitales llevaron al gobierno, a principios de 2001 y con el consejo del FMI, a organizar una ingeniería financiera denominada blindaje, por la cual diversos organismos internacionales, bancos y el gobierno de España ponían a su disposición 40 mil millones de dólares, a cambio de mantener el tipo de cambio atrasado y seguir las políticas ortodoxas, lo que favorecía a las multinacionales que podían prever su futura salida del país. Esta operación profundizó la recesión y aceleró la fuga de capitales y la repatriación anticipada de ganancias por grandes empresas como Repsol. Un ruinoso megacanje de títulos soberanos realizado por Cavallo incrementó los niveles de endeudamiento.

Frente a la corrida bancaria, a comienzos de diciembre de 2001, el gobierno impuso un límite semanal a los retiros bancarios ("corralito") y restringió la salida de divisas. La convertibilidad, de hecho, se derrumbó. Días después, el FMI anunció que no liberaría un desembolso pactado con Argentina abriendo el camino a la cesación de pagos. La deuda externa se aproximaba a los 170 mil millones de dólares.

Tras la caída de De la Rúa, se declaró el default de la deuda pública externa y el estallido del enorme desequilibrio cambiario acumulado reveló la verdadera dimensión de la deuda externa pública, que del 53 por ciento del PBI en 2001, con un tipo

de cambio artificialmente bajo, pasó al casi 150 por ciento. El default alivió momentáneamente las cuentas públicas y externas, difiriendo pagos, y se inició entonces una traumática negociación con los acreedores, que condujo a reestructurar la deuda, en 2005 y 2010, con la aceptación del 93 por ciento de los tenedores. Se emitieron tres tipos de bonos y se logró una reducción importante de la deuda pública externa, que en junio de 2013 ascendía a 66,6 mil millones de dólares, con un cronograma de vencimientos sustancialmente más holgado. También se pagó la deuda con el FMI. De todas formas, no se resolvieron todos los problemas derivados del endeudamiento. Todavía queda responder a los acuerdos del canje, está pendiente la deuda con el Club de París, y existe el problema creado por los fondos buitres.

Las divisas ingresadas sirvieron mayormente a la especulación financiera y salieron del país en forma de pago de intereses, beneficios repatriados y fuga de capitales. El actual gobierno está tratando de cerrar el capítulo de la vieja deuda y de obtener financiamiento externo sin ceder soberanía como en el pasado, procurando aplicarlo a las actividades productivas, al crecimiento y a una distribución más equitativa de los ingresos. Esperemos que así sea.

* Economista e historiador.

ECONOMÍA

Dos modelos en pugna

Por Carlos Fidel * y Alejandro Rofman **

En treinta años de vida democrática, la sociedad argentina asistió a la pugna entre dos modelos por hegemonizar el poder. Uno representa el propósito de configurar una nación agroexportadora, sustentada en las ventajas que provienen de los extensos territorios y la fertilidad natural. A éste se le contraponen la propuesta de una estrategia productiva diversificada, que intenta dinamizar las ventajas del agro combinadas con la ampliación de los sectores de base industrial, basada en un denso mercado interno.

El golpe militar de 1976, llevado a cabo por una alianza ideológica entre sectores militares y civiles conservadores, había delineado un nuevo trazado de las relaciones sociales que modificó de modo negativo la distribución del ingreso y la estabilidad de las fuentes de trabajo. El gobierno constitucional votado en 1983 poco pudo hacer para modificar su raíz estructural, condicionado por el enorme peso de la deuda pública en dólares. Incluso tuvo que adelantar su retirada en 1989 en medio del descontrol hiperinflacionario y una fuerte conflictividad social.

El gobierno que lo sucedió en ese 1989 pone en vigencia todos los principios de la estrategia neoliberal, aplicando fielmente los enunciados del llamado Consenso de Washington y rematando los bienes del Estado sin contemplaciones para intentar cumplir con los compromisos del endeudamiento. Pero sostener el modelo de convertibilidad implicó, entre otras cuestiones, que la deuda externa se incrementara en un 120 por ciento. La continuidad del mismo modelo conservador neoliberal más allá de fines de los '90 (gobierno de la Alianza) profundizó las condiciones de inestabilidad, que culminaron con la fuerte crisis monetaria, productiva, social y política de fines del año 2001.

La descomunal crisis económica y social que marcó el fracaso del modelo de predominio del mercado hizo volar por los aires el rígido sistema cambiario y tornó impagable la deuda pública externa e interna. Las dimensiones del derrumbe del tejido social resultaron inéditas. A partir de 2003, desde el gobierno nacional se pone en marcha una estrategia alternativa a la anterior basada decididamente —con avances y retrocesos, aciertos y errores— en una política económica y social centrada en una sociedad de trabajo,

inclusiva y con creciente redistribución progresiva del ingreso. Los logros están a la vista y las asignaturas pendientes no son pocas: crecimiento de la producción, caída del desempleo y un notorio achicamiento de la pobreza y la indigencia. Otro aspecto relevante ha sido la reestructuración de la deuda, en cesación de pagos desde fines del año 2001.



Pero en ese mismo período, la ampliación de la demanda global creó un indeseado fenómeno colateral: el resurgimiento de la inflación, alentada por la puja redistributiva. Frente al impulso de la demanda popular, el capital pudo reajustar precios injustificadamente. A la vez, reapareció, en los inicios de esta década, la cuestión de la restricción ex-

terna. La expansión del consumo de bienes manufacturados se encontró con un proceso de integración vertical y horizontal de la industria muy incompleto, excepto en el área de los alimentos manufacturados, acentuado en los sectores de las manufacturas de origen industrial que deben importar insumos y bienes de producción por no estar instaladas en el país estas actividades.

El poder económico altamente concentrado, basado en las elevadas rentabilidades de la explotación agrícola exportadora, la intermediación financiera y la monopolización y extranjerización de las principales ramas industriales, extraña la “libertad plena de los mercados” y pretende una brusca devaluación del tipo de cambio y la desaparición de la regulación económica, cambiaria y de precios. La estrategia oficial consiste en no ceder espacio a esos sectores, sólidamente apoyados por los grandes sistemas mediáticos de comunicación.

La persistencia, desde 2003, de un proyecto de perfil “progresista”, de inclusión social y de creación de empleo, enfrenta este gran desafío a futuro. Profundizar lo realizado para fortalecer una distribución crecientemente equitativa del ingreso, apuntalando el Estado de Bienestar reconstruido en forma paulatina, es la consigna para la década que viene. Dar

cuenta de los errores o de las acciones pendientes para que la transición desde un modelo conservador a otro basado en la valorización del trabajo sea continuada sin desmayos es una tarea compleja y difícil, en un escenario mundial poco propicio por la crisis persistente en los países centrales y el acoso local de los que quieren retornar a épocas anteriores, cuando los dueños del poder económico lo eran también del poder político.

Sólo una activa participación popular y la fidelidad a una estrategia que ha mejorado sustancialmente el perfil social de los sectores populares puede asegurar que ese desafío se encare con posibilidades ciertas de continuidad: de lo que hoy está presente y no se retroceda a épocas trágicas del pasado.

* Investigador y docente de la Universidad Nacional de Quilmes.

** Investigador principal del Conicet en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales/Conicet).

A partir de 2003 se pone en marcha una política económica y social centrada en una sociedad de trabajo, inclusiva y con creciente redistribución progresiva del ingreso.

GREMIOS



Mobilización y organización

Por Hugo Yasky *

Festejamos 30 años de gobiernos elegidos por el voto popular, pero es bueno aclararlo: nadie regala democracia. Si hay democracia es porque hubo lucha y resistencia popular. La CTA, como representante de una porción significativa de la clase trabajadora, jugó, junto a otras organizaciones sociales y políticas, un rol fundamental en ese proceso.

En la Argentina, estamos viviendo el ciclo más largo de vida democrática. Nuestro país transitó una oscura tradición de golpes militares, siempre orquestados por las oligarquías del poder económico, que intentaban poner límites a la expresión de las mayorías. Después del terrorismo de Estado y de esos años en los que sufrimos la pérdida de 30 mil compañeros, la recuperación de la democracia significó también sostener una larga resistencia para pasar a dotarla de contenido vivo.

Durante estas tres décadas atravesamos distintos escenarios. La democracia de los primeros años de Alfonsín, tutelada y con el aliento en la nuca de los militares todavía presentes en la escena política, era una democracia frágil. Había que defenderla como una copa de cristal, frente a los embates de los sectores que, escudándose en el poder militar, se servían de ella para imponer condiciones. Luego atravesamos lo que se llamó la década perdida, el menemato. En ese período, asistimos a la entrega de nuestro país; la irrupción salvaje de las políticas neoliberales de los '90, el dolor de haber convertido a la Argentina en un laboratorio en el cual se gestaban los ensayos de las políticas de flexibilización y privatización, el intento de municipalización del sistema educativo; el intento de convertir a la salud en un negocio privado, más la transferencia de los servicios hacia las provincias que antes garantizaba el Estado nacional.

Todo ese período fue también un tiempo de lucha y de debate, no tanto contra la amenaza de la dictadura militar sino frente al hecho concreto de la irrupción de la dictadura económica.

Los sectores que fuimos capaces de proclamar nuestra rebeldía disputamos de manera activa lo que entonces se nos mostraba como irreversible, mientras otros decían y teorizaban acerca del final de la Historia. En esas condiciones, la rebeldía y la resistencia

fueron también un acto de disputa en el terreno intelectual, porque hubo que inventar razones en un momento en que el Poder nos ignoraba. Tuvimos que hacernos fuertes en un discurso, el de resignificar la democracia. ¿Democracia era simplemente votar representantes, nuevos miembros de un Poder Ejecutivo que después aplicarían políticas que decidían otros fuera de nuestro territorio? ¿O democracia era aceptar de manera sumisa que nuestras decisiones en el terreno económico y de los proyectos sociales fueran impuestas, simplemente, por un ministro de Economía que viajaba a Washington y firmaba una carta de intención?

En ese período, transitamos una democracia de baja intensidad, la democracia que Washington imaginó para los países periféricos. Aquella democracia en la cual la voluntad de las mayorías no podía ser tenida en cuenta, porque las políticas del gobierno tendían a favorecer a las minorías y se aplicaban para expoliar a las inmensas mayorías populares en función del pago de la deuda externa.

En ese tránsito de fin de ciclo aparece la conformación de la Alianza (Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación), casi como un atajo, que a poco de andar se mostró como el cierre, el fin de fiesta del neoliberalismo. Y de la peor manera: con el asesinato de más de treinta compañeros y compañeras víctimas de la represión en las calles en aquellas jornadas de diciembre de 2001. Por medio de esta larga resistencia, los que no nos arrodillamos ante la lógica de los poderosos, ni nos resignamos a aceptar como inevitable la política de desigualdad y exclusión social, pudimos mantener la llama encendida que posibilitó el alum-

bramiento de la tercera década.

En esa resistencia resignificamos la democracia. La democracia entendida como el avance hacia políticas de contenido social y la recuperación de la política como herramienta a favor de los intereses de las mayorías populares. Ese es el gran debate que hoy tenemos en nuestro país. La democracia sin límites ni fronteras, extendida en el plano de la ampliación de los derechos: civiles, de género, de pueblos originarios, de los jubilados. La democracia, entendida inclusive como una forma de socialismo, en tanto y en cuanto no haya límites impuestos desde los poderes fácticos o económicos financieros.

Hoy estamos protagonizando esa puja muchos pueblos de América, particularmente y de manera muy intensa en nuestro país. La puja por consolidar una democracia que tenga sustento en la organización y en la movilización de los sectores populares, que pueda plantearse nuevos horizontes sociales de reivindicación de los excluidos, nuevos horizontes para las minorías discriminadas para que puedan ampliar derechos. Y también, limitar, porque ampliar derechos de las mayorías es limitar los privilegios de las minorías.

Es un momento de intensas disputas, de marcadas contradicciones. Un momento en el que los poderosos tratan de hostilizar. Arturo Jauretche decía "cuando los pueblos ganan derechos, viven esos momentos como momentos de felicidad, de avance y cuando los privilegiados pierden esos privilegios los viven, al revés, con odio, con resentimiento". De alguna manera, estas dos cosas están tiñendo estos últimos tiempos de nuestra democracia.

El presente, todavía es una tarea inconclusa, llena de interrogantes y también de acechanzas. Los movimientos populares de Argentina y de América latina, a pesar de todo, siguen su camino de avance. Estamos construyendo una democracia que no es de baja intensidad, que no acepta los límites de los poderosos, que pone en cuestión las razones del dominio imperialista y fundamentalmente que les devuelve a los pueblos la esperanza de vivir en sociedades en las que la indignidad del hambre, la exclusión y la violencia contra los oprimidos desaparezcan de manera definitiva.

* Secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).

Los sectores que fuimos capaces de proclamar nuestra rebeldía disputamos lo que entonces se nos mostraba como irreversible.



CIENCIA

El dilema de la voluntad

Por Adrián Paenza

Hablemos un poco de ciencia en estos últimos treinta años. Haber vuelto a la democracia, tal como se vio a lo largo de estas tres décadas, no necesariamente garantizó un retorno al paraíso. De hecho, el gobierno más débil, el que menos aval tuvo en las urnas (un 22 por ciento de votos con los que ganó Néstor Kirchner) fue el que produjo el primer “quiebre” y cambio fundamental.

Me explico. Alfonsín tuvo un apoyo descomunal, no sólo por parte de quienes lo votaron, sino por parte de todo el resto que quería respirar, vivir en un clima de libertad, sin opresiones ni censuras ni crímenes ni desapariciones. Su llegada fue un símbolo: “Con la democracia se come, con la democracia se cura, con la democracia se educa”. Sí, todo eso es cierto, pero después hay que poner el dinero, porque nadie trabaja gratis (ni debería hacerlo), nadie construye sin materiales, nadie siembra sin semillas, nadie cura sin medicamentos.

Investigación y desarrollo

Inversión en Investigación y Desarrollo (I+D)

Año	Inversión en I+D como % del PIB	Inversión en I+D en millones de \$
1996	0,42%	1.136
1997	0,42%	1.229
1998	0,41%	1.230
1999	0,45%	1.285
2000	0,44%	1.247
2001	0,42%	1.141
2002	0,39%	1.216
2003	0,41%	1.542
2004	0,44%	1.959
2005	0,46%	2.451
2006	0,49%	3.237
2007	0,51%	4.127
2008	0,52%	5.410
2009	0,60%	6.817
2010	0,62%	8.908
2011	0,65%	11.917
2012	0,74%	16.024

Fuente: MINCyT

Alfonsín tuvo un gesto muy particular al designar a don Manuel Sadosky al frente de lo que hoy sería el Ministerio de Ciencia y Técnica. Pero tal como sucedería por más de veinte años (hasta 2003), los presupuestos e inversiones en ciencia fueron siempre miserables, migajas con valor simbólico, pero nunca hubo una política de Estado que le diera entidad a la ciencia como un componente determinante e importante en la generación de un país distinto. Para ello hace falta presupuesto: no hay otra.

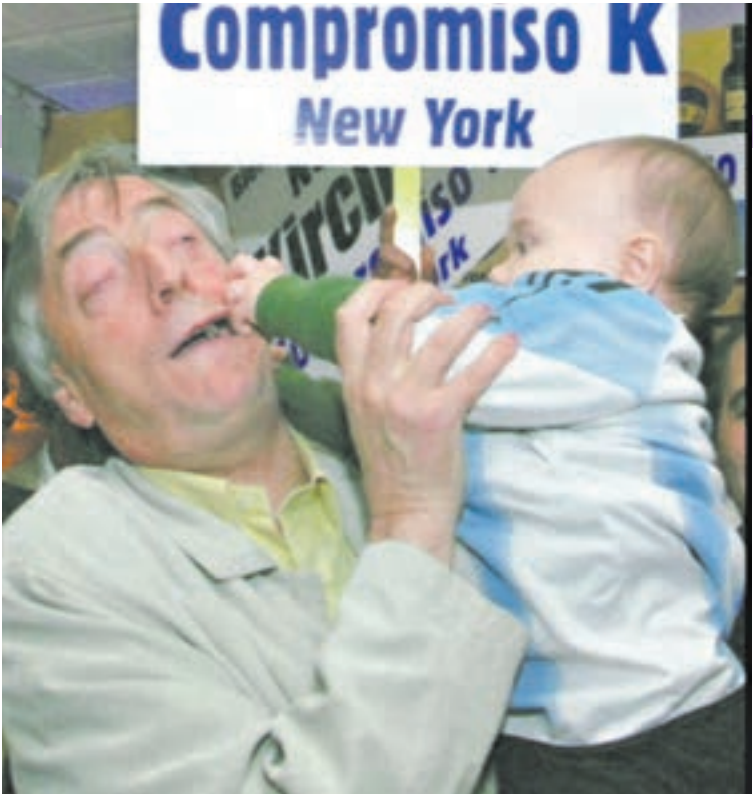
Acompañando esta nota hay un par de cuadros. Este tipo de cuadros no siempre son revisados por el lector con detenimiento, sino que parecen ser una suerte de “adorno”. Le propongo que esta vez no sea así. No importa cuál es o sea mi opinión al respecto. No importa cuánto aborrezca yo toda la época menemista de entrega vergonzosa, de relaciones carnales, de “pizza y champagne”. No importa si usted estuvo a favor de la Alianza (y lamentablemente yo estuve y la voté) porque se comprometieron a hacer algo que nunca hicieron (hablo de ciencia, pero usted cambie el rubro por el que prefiera). Cuando anunciaron en su plataforma que llevarían el presupuesto para ciencia y técnica al uno por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), yo “compré” inmediatamente: les creí. Pero después Dante Caputo, en una memorable (para nosotros) entrevista en *Día D*, junto a Horacio Verbitsky, terminó reconociendo sin “despeinarse”: “Paenza, eso es mucho dinero”. ¿Mucho dinero? Sí, claro que es mucho dinero, sobre todo si ustedes no están dispuestos a cumplir con sus promesas.

Es por eso que los cuadros que acompañan la nota son tan importantes. Los datos comienzan en el año 1996, pero marcan una tendencia. Fíjese cómo es posible, sin conocer a ninguna de las personas involucradas (presidentes o secretarios de Ciencia circunstanciales), entender cuáles eran las intenciones: el porcentaje —entre 1996 y 2002— estuvo oscilando como máximo en el 0,45 por ciento (en 1999) y mínimo en el 0,39 por ciento (en 2002). Pero no bien llegan al gobierno los Kirchner, la situación cambia, la tendencia cambia. Del 0,41 por

ciento en 2003 se pasa a un 0,65 por ciento en 2011 y la estimación para 2012 es de un 0,74 por ciento, aunque la gente del Ministerio de Ciencia y Técnica prefiere que no use esta estimación por temor a que el número sea un poco menor. No importa: si el número no es exactamente ése, la tendencia se mantendrá. Es un salto brusco, fundamental, fundacional. Es un incremento de más del 80 por ciento. Eso sí que es mucho dinero. ¿Suficiente? Seguro que no, seguro que aún hoy todos los que estamos involucrados en producir y/o difundir la ciencia en el país, en promoverla, en mostrar la necesidad de ser independientes produciendo lo que nosotros necesitamos, resolviendo los problemas que nosotros tenemos, tomando las decisiones en términos de energía, farmacología, nanotecnología, biogenética, creación de software, fabricación de reactores nucleares, lanzamiento de satélites, biotecnología, criptografía, etc; etc. consideramos que es insuficiente. Y está bien que así sea.

Pero los datos no se terminan ahí. Si uno quiere mirar lo que sucede en el Primer Mundo, allí está Japón invirtiendo el 3,26 por ciento del PBI en 2010. O los Estados Unidos (con todas las crisis que atraviesa) con el 2,9 por ciento en 2009 o Alemania con el 2,82 por ciento en 2010 también. Revise la lista y vea lo que sucede ahora con la Argentina. Dentro de los países con los que podemos compararnos, solamente estamos debajo de Brasil, pero si el porcentaje estimado de 2012 (0,74 por ciento) se confirma, estaremos casi un 60 por ciento por encima de México y de Chile. Y si se prefiere elegir el del año 2011, con el valor de 0,65 por ciento, en-

Sadosky fue una persona extraordinaria para el país. Otra vez: “fuera” de lo ordinario, “extraordinario”... pero sin plata.



política

tonces invertimos casi un 40 por ciento más que México, que tiene el triple de habitantes que nuestro país.

Eso es poner el dinero donde uno pone la boca. Si uno se va a comprometer a mejorar la calidad de vida de la población, la inversión en ciencia y técnica es determinante. ¡No hay ninguna otra forma! Ninguna... salvo, que el precio a pagar sea la independencia. Entonces sí, busquen a Menem o a Cavallo. Ellos sí que saben cómo se hace. No por nada, siendo ministro de Economía, Cavallo mandó a los científicos a lavar los platos: toda una declaración de principios.

Esta nota se supone que hacía una reflexión sobre los treinta años que pasaron, sobre lo que significaron para la ciencia en democracia. Me da un poco de pudor no poder satisfacer a los editores del diario que me la pidieron. Sadosky fue una persona ex-

La inversión en ciencia

Inversión comparada con algunos países

País	Año	I+D/PBI
Japón	2010	3,26%
EE.UU.	2009	2,90%
Alemania	2010	2,82%
Francia	2010	2,25%
Australia	2008	2,24%
Canadá	2011	1,74%
Portugal	2010	1,59%
España	2010	1,38%
Italia	2010	1,26%
Brasil	2010	1,16%
Argentina	2012 (estimado)	0,74%
Argentina	2011	0,65%
México	2010	0,47%
Chile	2010	0,44%
Uruguay	2010	0,40%
Panamá	2010	0,19%
Colombia	2010	0,19%
Bolivia	2009	0,15%
Perú	2004	0,14%
Paraguay	2008	0,06%
Nicaragua	2002	0,04%

Fuente: MINCyT, OCDE y Ricyt

traordinaria para el país. Otra vez: “fuera” de lo ordinario, “extraordinario”... pero sin plata. La clase política no pudo (o no quiso) ver nunca lo que significa la inversión en ciencia, trazar políticas que tuvieran que ver con pensar un país que vivirían los ciudadanos en una época en donde ellos ya no serían “el poder”. Esa fue la gran visión de Néstor Kirchner. Esa es la gran visión de Cristina, más allá que usted esté de acuerdo con ella o no. Cuando pase el tiempo, cuando se haga una mirada retrospectiva y un análisis más sobrio y honesto de su gestión, su aporte en este sentido le permitirá ocupar un lugar muy destacado en la historia argentina, lo mismo que Néstor, quien fue el que lo inició, hace diez años.

Claro que importa la democracia, pero hay mucha gente del ambiente científico que se cuestiona hoy lo que sucederá en el país si hay un cambio de orientación política en 2015. ¿Habremos madurado para entender que aun sin Cristina (y sin Lino Barañao) no podemos darnos el lujo de prescindir del lugar que hoy ocupa? De hecho, es obvio que a ningún gobierno se le ocurriría prescindir del Ministerio de Educación, y eso sucede porque todo el mundo comprende la importancia de proveer una educación básica a la población, pero ¿un Ministerio de Ciencia?

Por último, y antes de dejarla/dejarlo en compañía de los cuadros que figuran acompañando la nota, quiero hacer una reflexión junto a usted, que está leyendo estos datos. No sólo aumentó el porcentaje del PBI que se invierte en Ciencia y Técnica, sino que, como ese PBI fue aumentando a lo largo de los años, hagamos el análisis usando una moneda un poco más estable que la nuestra –digamos el dólar o el euro, aunque entiendo la inflación que vive el Primer Mundo también– pero para hacer cuentas que nos dejen más tranquilos. En el año 2002, de acuerdo con los datos que provee el FMI (fuente insospechable, ¿no? nadie diría que está a favor de este gobierno...) el PBI de la Argentina fue de 97.732 millones de dólares. La Argentina, ese año, destinó el 0,39 por ciento del PBI a la investigación, o sea, alrededor de 381 millones de dólares. El año pasado, 2012, el PBI

(siempre con estimaciones del FMI) del país fue de 474.890 millones de dólares, y el porcentaje destinado a la ciencia y a la técnica se estima en alrededor del 0,74 por ciento. ¿Quiere hacer la cuenta conmigo? Eso significa, 3514 millones de dólares... o sea, ¡casi 10 veces más! y en solo diez años. Pero como los datos de 2012 no están confirmados aún, hagamos las cuentas usando los números de 2011 y comparémoslos con los de 2002. En ese caso, siempre en millones de dólares, el PBI fue de 447.179 y el porcentaje dedicado a la ciencia y la técnica fue del 0,65 por ciento, o sea, 2907. Si usted divide 2907 por 381 descubre que aun tomando este camino más conservador, el número se multiplicó casi por ¡ocho! [1]

Eso sí, no tengo dudas de que con la democracia, seguro que se cura, se educa y se come... pero, créame que el dinero que uno destina a esos efectos ayuda muchísimo.

[1] En realidad, 2907 dividido por 381 es 7,6299 (casi 7,63).

La ciencia en el PBI

	PBI (en millones de dólares)	Porcentaje del PBI en Ciencia y Técnica
1996	272.150	0,42%
1997	292.859	0,42%
1998	298.948	0,41%
1999	283.523	0,45%
2000	284.204	0,44%
2001	268.697	0,42%
2002	97.732	0,39%
2003	127.643	0,41%
2004	151.958	0,44%
2005	181.549	0,46%
2006	212.710	0,49%
2007	262.454	0,51%
2008	328.555	0,52%
2009	310.351	0,60%
2010	369.992	0,62%
2011	447.179	0,65%
2012	474.890	0,74%

TESTIMONIOS

Vamos al Juicio a las Juntas: habiendo sido presidente del tribunal que juzgó a las juntas militares, ¿nos podrías relatar sobre la relación que tuvo la Cámara Federal con el gobierno alfonsinista durante el juicio?

—No tuvimos una gran relación, salvo algunas personas que individualmente pudieran haber tenido algún contacto como Andrés D'Alessio y Ricardo Gil Lavedra. En realidad, esa Cámara tuvo una virtud y es que fue bastante plural: había tres radicales con Julio Strassera, un justicialista —yo— y tres independientes —Torlasco, Ledesma y Valerga Aráoz—. Ni Gil Lavedra ni D'Alessio cumplieron ninguna función de apéndice del Ejecutivo contra la Cámara, todo lo contrario, hubo un desempeño muy digno, muy independiente y no hubo ninguna decisión de las que se tomaron que no hubiesen sido por consenso o por discusión consensuada. Pese a la gravedad de las circunstancias, pese a la importancia de lo que estábamos haciendo, y pese al escozor que en el gobierno radical producían algunas de las medidas que estábamos tomando, las cosas funcionaron muy razonablemente.

—Entonces ustedes no recibieron presiones ni marcaje de cancha del Poder Ejecutivo.

—Nada. En todo caso preocupaciones que nos hacían llegar fundamentalmente antes del comienzo del juicio por el daño que podía hacer la publicidad, los temblores que podía producir que se les diera publicidad a las audiencias.

—¿Eso tuvo que ver con que las audiencias no salieran por la televisión?

—En realidad las audiencias se filmaron y todos los días había escenas de las audiencias pero no salían con audio, pero había 500 periodistas, entre extranjeros y nacionales, acreditados en la sala siguiendo el juicio. Es más, hasta estaba *El Diario del Juicio*, que publicaba día a día las audiencias. Había un diario sólo para eso.

—Me gustaría saber qué opinión tiene a casi treinta años del juicio sobre dos puntos que fueron polémicos o se discutieron en torno al Jui-

León Arslanian

Presidente del tribunal que en 1985 juzgó y condenó a las tres primeras juntas militares.

“No imagino una Argentina descansando en un indulto”

cio a las Juntas: la cuestión de imputar por arma y no por junta, que es algo que había pedido la fiscalía, y el famoso punto 30 que permitió continuar con los procesamiento para abajo.

—El punto 30 lo defiendi fervientemente porque fue lo que a nosotros nos permitió, de alguna manera, despegarnos de la estrategia alfonsinista que era la de juzgar a los máximos responsables y de ahí para abajo impunidad. Con el punto 30 nosotros rompimos este esquema.

—¿Recibieron alguna respuesta, alguna queja por eso?

—En mi caso particular no; pero sé que les preocupó mucho. En ese sentido, jugó muy bien Alfonsín porque, más allá del temor que le podía expresar alguno de sus ministros y de la presión que podían ejercer sobre él, el hombre dijo “tienen libertad para hacer lo que quieran”. Esta es la pura realidad. Con relación a la imputación por arma, el problema era que la Junta era un aparato político que no se acreditó que hubiera tenido la más mínima injerencia en materia de decisión de lucha contra la guerrilla. Se delegó en cada Fuerza, tanto es así que los planes difieren de una a otra Fuerza. La Junta Militar nunca dictó un plan de represión sino que cada Fuerza dictaba el propio.

(...)

—La última pregunta es más personal. ¿En qué cambió tu vida haber sido el presidente del tribunal de un juicio histórico como el Juicio a las Juntas?

—No creo que haya cambiado mucho. El haber tomado parte en ese acontecimiento en sí me ha permitido darme cuenta que significó el hecho más importante que produjo en mi vida. Pasa el tiempo y me doy cuenta de que es la proyección más importante, principalmente por lo que encuentro en el exterior, cómo tantos países nos reclaman, nos requieren para que hablemos de esto, para homenajearnos; por ejemplo, se está tramitando un homenaje en la Universidad de Salamanca que digitalizó la totalidad del juicio y que se va a presentar en esas condiciones. Noruega nos distinguió y toda la filmación de juicio está depositado en una urna de seguridad junto a la Constitución histórica del país. Todas estas cosas a uno le da la impresión de la importancia que ha tenido lo que hicimos y básicamente la necesidad. No imagino una Argentina descansando en un indulto. Muchas veces me pregunté qué hubiese pasado si no hubiera habido un juicio y me imagino una Argentina muy diferente. Nosotros confiamos tan ciegamente en la publicidad del juicio porque creíamos que nadie después nos iba a poder reprochar a nosotros si fuimos justos, injustos o complacientes. Creíamos que lo mejor era desplegar todo arriba de un escenario para que la gente viese lo que pasó. Creo que eso fue lo mejor que hicimos: mostrar y que todo el mundo viera, que tuviera la oportunidad de saber qué cosas habían pasado, que no era un verso, que era la realidad, que había gente que había padecido todo eso porque sino todo el mundo se olvida fácil. Eso de tener activa la memoria y presentes los hechos me da la impresión de que es lo que más nos protege de que no se reedite.

* Extractado del libro *Del país sitiado a la democracia. Diálogos a los 30 años*, de Guillermo Levy (editor). Ed. Gorla.

La Argentina que encontraste en 1984, después de haber pasado varios años entre la clandestinidad, el campo y el exilio, ¿en qué se diferenciaba y en qué se parecía a la de 1976-1977?

—Argentina no era tan diferente a la Buenos Aires de la que me arranca el secuestro. Yo dejo de circular por Buenos Aires a partir de octubre de 1977 y retorno en mayo de 1984. Una de las diferencias notorias era que no veías milicos por todas partes, pero como los milicos de aquellos años también andaban de civil, la sensación de que podían estar en todas partes permanecía. Pasé años sin poder tomar el subte en la estación Acoyte, y todavía hoy me produce resquemor estar en un lugar donde siento que me pueden ver sin que yo me dé cuenta. Por ejemplo, en los primeros tiempos, no podía ir a la terminal de Retiro o a la terminal de Constitución, porque eran lugares donde yo sabía que los milicos hacían estáticos, donde se instalaban por horas. Esa sensación de que te pueden estar mirando desde cualquier parte la tuve que vencer para participar en movilizaciones, para estar en reuniones en la circunscripción 14, cuando formé parte de esa agrupación que se llamaba 11 de Marzo; para

Graciela Daleo

Una de las fundadoras de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Coordinadora de la Cátedra Libre de Derechos Humanos, Facultad de Filosofía y Letras (UBA).

“Sentía que debía vivir con las normas de la clandestinidad”

expresar alguna opinión política sin tener que estar mirando si había algún “servicio”. El fantasma del servicio es una cosa con la que convivía. Durante años viví y nadie sabía mi dirección. Hasta que me fui a Uruguay, viví seis años en una casa que no conocía prácticamente nadie, que no visitaba prácticamente nadie, ni mi familia me visitó en esa casa y, por ejemplo, cuando me preguntaban en dónde vivía, yo de-

cía cerca del cementerio de Lomas, cuando en realidad vivía en Sarandí. Sentía que tenía que vivir manejándome con las normas de la clandestinidad, de protegerme de cualquier amenaza. De hecho, me fui a vivir a zona sur porque, cuando empecé a buscar vivienda, sentía una inquietud permanente en todas partes y en el único lugar —aunque parezca absurdo— donde me sentía tranquila era en zona sur, cruzando el Riachuelo; quizá porque la Marina no operaba ahí, no sé. Ese componente estuvo muy presente en ese tiempo. Ahora, yo diría que, en otros aspectos, Buenos Aires no me parecía tan distinta a aquella que había dejado. Lo que sí fue tremendamente fuerte todo el tiempo, sobre todo en los primeros tiempos, fue el recorrer la ciudad y el Gran Buenos Aires por la razón que fuere y encontrar siempre los vacíos, “en este lugar me encontré con tal y está desaparecido”, “en este lugar me encontré con este otro y está desaparecido”. Era algo que yo tenía profundamente presente y muy recordado.

* Extractado del libro *Del país sitiado a la democracia. Diálogos a los 30 años*, de Guillermo Levy (editor). Ed. Gorla.

ARGENTINA Y EL MUNDO

El factor internacional

Por Atilio A. Boron *

La lenta y escarpada marcha de la democratización latinoamericana estuvo marcada, desde sus comienzos en los años '80, por el influjo ejercido por el contexto internacional y, sobre todo, por la política imperialista de Estados Unidos. La Argentina retomó la interrumpida marcha hacia la democracia a fines de 1983, en una época signada por el apogeo de la contrarrevolución neoconservadora, impulsada por un tridente reaccionario constituido por Ronald Reagan en Estados Unidos, Margaret Thatcher en el Reino Unido y Juan Pablo II en el Vaticano, culpables de haber ocasionado uno de los mayores retrocesos económicos, sociales y culturales de la historia contemporánea. El clima ideológico alimentado por este trío, hostil al ideario democrático, se combinó con la crisis de la deuda externa y el inicio de un ciclo recesivo en la economía mundial que, al revés de lo que ocurriera en la Europa de posguerra, le imprimió un signo socialmente regresivo a los procesos democratizadores. Si en Europa esto ocurrió bajo la influencia del keynesianismo, entre nosotros tuvo lugar bajo la sofocante presión ejercida, en nombre de la oligarquía financiera mundial, por el FMI, el BM y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Las ásperas relaciones entre Alfonsín y Reagan ilustran muy bien esta brutal contradicción. Ya en los '90, fue el Consenso de Washington el que codificó la política económica "correcta". El país que aplicó con mayor minuciosidad las recomendaciones de ese manual para la dependencia fue la Argentina de Menem, quien privatizó, desreguló y liberalizó todo, algo que ni siquiera había hecho Pinochet en Chile (que preservó la Codelco en manos del Estado) o Salinas de Gortari en México, que en el gran remate de empresas públicas se abstuvo de liquidar a Pemex y la CFE. Bajo estas condiciones era evidente que la promesa democrática iría a rebajarse a una democracia de "baja intensidad", reducida a un periódico ritual que convocaba a los ciudadanos a las urnas para elegir a quienes luego habrían de gobernar en nombre del capital. Pese a estas restricciones, y a la enorme deuda social que se acumularía incesantemente hasta el catastrófico desplome de la convertibilidad, el vigor de los organismos de derechos humanos y sus fuerzas políticas aliadas alcanzó para poner en marcha un proceso inédito en América latina y que constituye sin duda el mayor mérito del período democrático que sitúa a la Argentina en un lugar de vanguardia en el plano internacional: el juzgamiento de los principales responsables del terrorismo de Estado y de las atrocidades promovidas por el Plan Cóndor urdido por el imperio. Proceso que tuvo sus altibajos (leyes de obediencia debida y punto final) y que, con la anulación de dichas leyes durante el gobierno de Néstor Kirchner, abriría una etapa sin precedentes de juicio y castigo



a centenares de represores que aún hoy no tiene igual en América latina y en pocos países del mundo. Una prueba: los familiares de las víctimas españolas del franquismo acuden a la Argentina para que se les haga justicia a sus reclamos. De la mano de la política de "juicio y castigo" vino otro logro excepcional en el marco latinoamericano: haber asegurado la supremacía civil sobre las fuerzas armadas, algo hasta ahora imposible para nuestros vecinos —principalmente Chile y Brasil— tantas veces exaltados como "modelos a imitar" y en los cuales la autonomía de las fuerzas armadas —en algunos casos constitucionalmente avalada, como en Chile— impide no sólo el enjuiciamiento de las monstruosidades cometidas en los tenebrosos años '70, sino siquiera el establecimiento de unas muy acotadas "comisiones de la verdad".

La faceta internacional de las políticas que el menemismo ensayó puertas adentro fue la de las "relaciones carnales" con EE.UU. y cuyas perniciosas consecuencias se expresarían en la hostilidad de Washington años más tarde. Tanto servilismo y ob-

El servilismo y obsecuencia para ganarse la amistad de Estados Unidos demostraron ser totalmente inútiles.

secuencia —participación en la primera guerra del Golfo, liquidación del misil Cóndor, etcétera—, justificados por la necesidad de ganarse la amistad de Estados Unidos, demostraron ser totalmente inútiles. "Estados Unidos —como lo asegurara su sexto presidente, John Quincy Adams— no tiene amistades permanentes sino intereses permanentes." A la hora de la verdad, la Casa Blanca respaldó a los fondos buitres y vetó préstamos a la Argentina aprobados por el Banco Mundial, entre muchos otros gestos inamistosos para con la Casa Rosada. El gobierno de la Alianza siguió, en sus líneas fundamentales, con la orientación heredada de su predecesor, y la Argentina pagó muy caro el precio de semejante error. El previsible derrumbe de la convertibilidad sumergió a la democracia argentina a una situación caótica sin precedentes, luego de la cual se produjo una trabajosa y precaria reconstrucción del sistema político y, finalmente, la asunción de Néstor Kirchner. En la etapa inaugurada en mayo de 2003 se produciría una significativa reorientación de la política exterior, progresivamente inclinada hacia Latinoamérica y asociada a los proyectos de unidad continental liderada por Hugo Chávez y que encontró en la derrota del ALCA, en Mar del Plata, su más acabada expresión.

La coyuntura geopolítica actual plantea renovados desafíos a la democracia argentina. Estados Unidos, un imperio que según sus ideólogos se enfrenta a la irreversible declinación de su poder global, ensaya una nueva estrategia destinada a recuperar el control total de la región. Su ilusión es rediseñar el mapa sociopolítico latinoamericano tal como estaba en vísperas de la Revolución Cubana. Para ello trabaja para implosionar los proyectos integracionistas —Unasur y Celac—; poner fin a las experiencias bolivarianas, comenzando por Venezuela; provocar un "cambio de régimen" en Cuba y, a la vez que consolida los gobiernos de sus incondicionales aliados, procura erosionar mediante la guerrilla mediática a los gobiernos cómplices del revés sufrido en Mar del Plata: Argentina, Brasil y Uruguay. Ese y no otro es el significado de la Alianza del Pacífico, una iniciativa sólo en apariencia latinoamericana y, más que económica, geopolítica. De ahí la importancia crucial de defender y fortalecer la Unasur. Bajo estas desfavorables condiciones, el avance democrático se torna lento e incierto, y pese a importantes conquistas tales como la AUH, jubilaciones, reestatizaciones varias, matrimonio igualitario, ley de medios, expansión de la inversión en educación, ciencia y tecnología, entre otras, las asignaturas pendientes en el caso argentino: pobreza, inequidad distributiva, regresividad tributaria, fuga de capitales, vulnerabilidad externa y agresión medioambiental se tornan mucho más difíciles de resolver.

* Director del PLED, Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.



GÉNERO

La presencia del

Por María Moreno

Cuidado con las alegorías. *La libertad guiando al pueblo* de Eugène Delacroix está representada por una gorda con vestuario muy poco adecuado para la lucha —una túnica desnudista que le pone las tetas en las narices al espectador—, es zurda (tiene el fusil en la mano izquierda y la bandera en la derecha: ¿la libertad será exclusiva de la izquierda o para una mujer es más importante agitar una bandera que disparar su fusil?), el burgués de su costado le apunta con su arma al pecho y, más allá del contexto histórico preciso, a lo que guía es a una pila de cadáveres (¿sabiendo que su precio es formar parte de ellos?). La República suele ser la misma gorda nutricia con gorro frigio que tiene un vago parecido al de Papá Noel. Un índice de democracia es quizá que a la democracia se la haya dejado de representar con una figura femenina (las alegorías no tienen derechos ni poder, ni trabajan ni estudian, ni cogen ni quedan embarazadas).

Treinta años de democracia para las mujeres no podrían pensarse sin la presencia renovada de los feminismos —de su transmisión a menudo larvada, quizá difícil de capitalizar— y de los que no hay aún una historia plena quizá porque tuvieron un límite preciso en su construcción política, en la conexión con otras luchas y su capacidad de legar para el presente. A veces sus acciones llegaron a tener la forma de un oxímoron: el 3 de septiembre de 1945, la Asamblea Nacional de Mujeres, presidida por Victoria Ocampo, resolvió rechazar que el voto de las mujeres “fuese otorgado por decreto por un gobierno de facto”; a las Madres de Plaza de Mayo cuya figura no cesa de ser pensada en un *más allá de la política*, en su pleno valor simbólico, se las acusó alguna vez por carta de no ser feministas. Que Evita acusara de

“burguesas” a las sufragistas mientras les daba el sufragio a las mujeres plantea un tema recurrente: el de la autoadscripción: ¿es feminista quien declara serlo o aquel/lla cuyas prácticas abren a la invención de un sujeto diverso y sexuado, individual o colectivo que determinada interpretación puede reconocer como feminista? (cuando el intelectual Carlos Monsiváis se autoadscribía como “cronista” no estaba utilizando la modestia afectada sino el deseo de filiarse en una tradición crítica latinoamericana).

Un rasgo específico en los movimientos de mujeres locales fue efecto de que la peste de la psicología prendiera en Argentina con una fuerza que sorprendió a los mismos fundadores del psicoanálisis: con la fundación de la Asociación de Psicólogos, en 1962, la licenciada fue relevando a la maestra normal en número y responsabilidades para el pasaje que Jorge Balán denominó “del diván al sillón” y gran salida laboral para mujeres de clase media y con deseos de transformar su autorreferencia en conocimiento de sí. La psicóloga reemplazó a la maestra en proliferación y respetabilidad, pero a menudo desde la integración a instituciones en donde se conservaba el *statu quo* respecto de la posición de las mujeres en el paradigma psi. Durante los primeros años de la democracia, el Foro de Psicoanálisis y Género, los tra-

bajos de la licenciada Ana María Fernández, de Irene Meler y de Martha Rosemberg, las prácticas pioneras de María Luisa Lerer, Graciela Sikos, Lilia Misraji y Mabel Burin, desde una heterogeneidad de posiciones teóricas y tareas militantes, no han consentido en el silencio sobre los términos mismos con que la teoría psicoanalítica y psicológica define la feminidad, cuestionaron supuestos de la clínica y generaron una escucha en género.

Momentos fecundos

En cuanto a las militantes de los grupos revolucionarios de los años '70, ¿cuántas mujeres no alcanzaron, urgidas por dicotomías más urgentes o atroces, a apoyar sus miradas en la palabra —hoy en pleno estallido— “género”? Si bien la clandestinidad no favorece la heterogeneidad de los discursos, la polarización de la lucha —en muchos casos, militarización— no da lugar a la reinscripción de zonas consideradas accesorias como la diferencia de los sexos, la equidad en el acceso a los lugares de conducción, la revolución de los placeres, la diversidad, la ética reproductiva, la relación entre estética y política. Hubo experiencias proteicas como la del grupo Política Sexual, cofundado en 1972 por Néstor Perlongher, representante del ala ultra del Frente de Liberación Homosexual de la Argentina y que nucleaba a disidentes eróticos, pedagogos piageteanos y feministas y la creación en Montoneros de la Agrupación Evita.

Los momentos fecundos no son los que producen frutos sino los que generan algo no capitalizable, pero donde alianzas provisionales enriquecen a los que habrán de separarse por sus diferencias. O son los momentos fundantes en donde todo está por inventarse y aún no se ha instalado ni la comodidad institucional ni el riesgo de aniquilación. Hay dos

Treinta años de democracia para las mujeres no podrían pensarse sin la presencia renovada de los feminismos.



feminismo

trabajos académicos de primera necesidad: *Las "mujeres políticas" y las feministas en los tempranos setenta: ¿Un diálogo (im)posible?* de Karin Grammatico y *Las mujeres dicen basta: movilización, política y orígenes del feminismo argentino en los 70*, de Alejandra Vassallo.

Según la investigación de Alejandra Vassallo en UFA (Unión Feminista Argentina), fundada en 1970, considerada "burguesa" por la izquierda y de la que formaban parte Gabriela Christeller, Luisa Bemberg, Nelly Bugallo, Leonor Calvera y María Elena Walsh, funcionaron grupos de mujeres políticas como las pertenecientes al grupo Muchacha, del PST (Partido Socialista de los Trabajadores), que lograron incorporar algunas reivindicaciones feministas en el interior del partido, y Nueva Mujer, liderado por Mirta Henault, en su origen perteneciente al grupo Palabra Obrera y, según su propio mito de origen, convertida al feminismo luego de leer *Mujeres, la revolución más larga*, de Juliet Mitchell.

Según el artículo de Grammatico, en 1973 el PRT-ERP decidió lanzar un Frente de Mujeres y el folleto *El ERP a las mujeres argentinas*. La iniciativa, de acuerdo a la entrevista que le hace al investigador Pablo Pozzi, se debió a que las militantes del partido en los años setenta habían alcanzado el 40 por ciento de la totalidad de la organización. Esa versión del Frente nunca se realizó. La demanda de un grupo de mujeres militantes exigió que el Frente dejara de ser el anuncio de un buró político tan impermeable a las reflexiones sobre género como a la influencia del feminismo. En un documento elaborado en julio, se evidenció, por primera vez, "que se dejaba de lado toda referencia a la familia, los hijos y la maternidad, para considerar a la mujer argentina como una parte fundamental de la revolución en pie de igualdad con el hombre".

El trabajo de Alejandra Vassallo es valioso porque cuestiona la separación radical entre mujeres dispuestas a revisar su condición en las praxis de los partidos revolucionarios y otras a lo sumo liberales que interpretaban a las mujeres políticas como no químicamente puras en las luchas de género, contaminantes cuando no cooptadoras desde el patriarcado rojo. Si bien las escisiones fueron calculables, fue la militarización de las luchas y la presencia de la dictadura lo que cortó devenires tal vez menos irreversibles y más complejos que se retomaron en democracia. Para algunas militantes fue el exilio el que liberó el acceso a la experiencia feminista; a menudo disueltos sus partidos o exterminados, en los intersticios de las luchas internacionales por los derechos humanos alcanzaron a sentirse interpeladas por esas que hacían con la mano en alto la señal de la vagina. Es que en medio de las noticias que parecían abrir a un duelo renovable, de la culpa de haber sobrevivido a tantos, el exilio permitió —se continuara en la práctica militante, aun en limitadísimas condiciones, o se haya tomado distancias con éstas— restituir a la vida cotidiana aspectos enajenados por la militancia, donde el modelo político militar parecía haber comprometido la vida toda. El ideal sacrificial, el ascetismo que imponía la clan-

Un índice de democracia es quizá que a la democracia se la haya dejado de representar con una figura femenina.

Algunas fechas democráticas

1982 Se creó *Lugar de Mujer*, un colectivo heterogéneo en el que convergían diversas organizaciones, que acompañó las primeras leyes a favor de las mujeres, como las de patria potestad compartida y divorcio vincular y que aún existe como espacio político.

1982 Se fundó ATEM (Asociación de Trabajo y Estudio de la Mujer) 25 de Noviembre, en homenaje al Día Internacional contra la Violencia Social, Sexual y Política establecido por el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe. Este grupo fue el primero en relacionar desde el vamos violencia política con violencia sexual e interesarse por las organizaciones de Madres, Abuelas de Plaza de Mayo y Familiares de detenidos desaparecidos. Bajo el eslogan de que la violencia contra las mujeres es una cuestión de derechos humanos, investigaron la situación de las mujeres militantes en cautiverio y bajo tortura, así como la visibilización de las mujeres desaparecidas en cuanto a género. Publican la revista *Brujas*.

1988 Durante el Día Internacional de la Mujer, Ilse Fuscova, directora de *Cuadernos de Existencia Lesbiana*, salió a la plaza con carteles que difundían su publicación.

1991 Ilse Fuscova, con un chal color fucsia —el color del feminismo—, abrió el closet sobre la mesa de Mirtha Legrand y se declaró lesbiana.

2005 Se creó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, que incluía 29 organizaciones muy heterogéneas de todo el país. Se realizaron acciones nacionales como una marcha multitudinaria de la que participaron 15.000 mujeres, acciones parlamentarias como el apoyo de 23 firmantes de todos los bloques legislativos, efectos en fallos en el Poder Judicial, como cuando se imputó y procesó a los médicos que se negaron a realizarle una intervención terapéutica a una mujer que sufría cáncer porque ponía en peligro su embarazo, y en Río Negro se autorizó el aborto a una menor de 13 años que había sido violada.

2008 Se hizo el 1° Encuentro Nacional de Mujeres Lesbianas y Bisexuales.

2012 La Corte Suprema de Justicia de la Nación pronuncia un fallo a favor del "aborto no punible".

destinidad y la precipitación de los hechos encontró un límite en las democracias de llegada que, al mismo tiempo que quitaban el paréntesis a los deseos personales en suspenso, informaban sobre su dimensión política.

Ana María Amado, Martha Vassallo, Lila Pastori son algunas de esas militantes que volvieron "apestadas" y continúan desde sus prácticas profesionales y combativas ya en democracia poniéndoles palabras a unas tensiones de género a las que la política hace aún oídos sordos aun con su múltiple oferta de leyes.

Treinta años

Hoy la puja por la existencia plena en la ciudad se desarrolla entre sujetos que hacen estallar el casamiento entre *sexo, género, cuerpo y deseo* y luchan contra el femicidio (la *mujer bonzo* se debe al último look criminal de género), la trata (en el año '13, el mismo número de la Asamblea que abolió la esclavitud) y los crímenes de odio (de travestis y prostitutas).

El feminismo y el movimiento Glttb dialogan como lo hacían el Frente de Liberación Homosexual y las feministas de izquierda antes del '76 —los suplementos **Soy** y **Las12** recogen esa herencia (no hay origen, se inventa políticamente en función de un proyecto). También dialogan con las leyes que, enunciadas como una perfección de la democracia (Ley 23.264 de patria potestad compartida y cuidado de los hijos; Ley 26.485 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; Ley 26.364 sobre trata de personas; Ley 24.417 de violencia familiar; Ley 25.673 de Creación del Programa Nacional de Salud y Procreación Responsable; Ley 19.075 de matrimonio igualitario), contienen los históricos postulados de los feminismos.



DIVERSIDAD SEXUAL

Cuerpos de la política, política de los cuerpos

Por María Alicia Gutiérrez *

Hace escasos treinta años el país iniciaba el proceso de transición a la democracia y se abría un horizonte de esperanzas e ilusiones que habían sido arrebatadas unos años antes. Durante treinta años, nuevas generaciones han experimentado vivir su cotidianeidad alejadas de modelos autoritarios. No es poco y es mucho para celebrar.

El 10 de diciembre de 1983, un grupo importante de la ciudadanía argentina festejaba la llegada de la democracia con la tristeza de los ausentes. El cuerpo fue un eje central en las políticas de derechos humanos que comenzaban a gestarse. Sin embargo, las luces y las sombras del proceso destilaban potencialidades y también fisuras por donde se escapaba sistemáticamente la exclusión de los cuerpos de los desaparecidos, de la pobreza, de las sexualidades invisibilizadas, entre otros.

Los derechos individuales como derechos personalísimos marcaron una inflexión en la joven democracia y tomaban forma nuevos sujetos y colectivos sociales que demandaban su inclusión. Situación paradójica en la región latinoamericana: al tiempo que se perdían derechos universales consagrados (como el derecho al trabajo) se lograba poner en las calles y en el campo legislativo demandas que hacían a la diversidad de los cuerpos.

La presencia y la lucha de los grupos de diversidad sexual (aunque no portaran ese nombre) no fue exclusiva del proceso democrático iniciado en 1983 hasta el presente. Hace pocos días se homenajeó al FLH (Frente de Liberación Homosexual) y se recogió la historia de Las Safinas marcando una significativa genealogía. Grupos emblemáticos como Po-

lítica Sexual daban cuenta de la inminente necesidad de pivotar en la sexualidad como una clave para la liberación. La oscura noche de la dictadura pareció borrar con desapariciones, persecuciones y exilios forzosos toda una historia que bienvenida sea su recuperación.

En la década de los '80, la aparición en la escena pública de sujetos sociosexuales va a darles una impronta y una resignificación muy potente a las luchas de aquellos años. El estallido de la categoría género cuestionó la esencialidad y el binarismo que el sistema sexo/género continuaba sosteniendo. El sexo como categoría política fundante de la sociedad con hegemonía heterosexual sería repensado como construcción del orden discursivo. Diversos son los colectivos que toman estatuto público en esos años en un intento de incorporar las demandas específicas sobre la sexualidad en el contexto de una lucha política integral por mejores condiciones de vida para todos y todas.

Las fisuras de la teoría, así como las prácticas políticas, toman forma en sujetos que expresan su deseo y la necesidad de romper el encorsetamiento social, en el contexto de los derechos humanos y en la de-

manda de autonomía y libertad para decidir sobre el cuerpo. Los gays, las lesbianas, los trans, las travestis y el conjunto de las diversidades alzan la voz para reclamar por su condición de identidad específica, pero también por un universal ciudadano que los excluye. Los diferentes grupos marcaron con su impronta un derrotero que se visualizó en la organización de las Marchas del Orgullo, que fueron progresivamente sumando a colectivos diversos.

El matrimonio igualitario y la Ley de Identidad de Género (entre otras) en los inicios del siglo XXI coronaron una fase de la lucha imposible de lograr sin la existencia de un régimen democrático. Imposible de lograr, también, sin una inmensa cartografía de organizaciones que hicieron de la resistencia y la presencia su sentido vital. En muchos sentidos otorgan la legalidad consagrada para el régimen heterosexual y con ello hacen justicia ante la discriminación. Son diversas las posiciones de los diferentes grupos políticos de diversidad sexual sobre el impacto, en la vida cotidiana, de las leyes. Quizás ello signifique que la realidad, la vida y los cuerpos no se coagulan con la existencia de leyes, sino que los logros reactivan la amplificación y continuidad de las luchas. De ello da cuenta, entre tantas, la enorme deuda de la democracia con el aborto legal, seguro y gratuito.

El Estado de Derecho y la libertad son imprescindibles para que los cuerpos continúen recuperando su dignidad y la intensa búsqueda de una vida que merece ser vivida para la inmensa mayoría de la ciudadanía.

En los '80, la aparición en la escena pública de sujetos sociosexuales va a darles una impronta muy potente a las luchas de aquellos años.

* Docente e investigadora facultad de Ciencias Sociales UBA. Integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

URBANISMO

Las ciudades, el suelo y sus usos



“No hay dilema irresoluble entre inclusión y crecimiento.”
(Axel Kicillof, *Página 12*, 3-12-2013.)

Por Rodolfo Livingston *

Si no es irresoluble quiere decir que el dilema existe. En el municipio de Tigre, los barrios cerrados de Nordelta representan un crecimiento económico constante. Constructoras, “desarrolladores”, “brokers” y Sergio Massa están contentísimos y parece que también los votantes. Eso sí, los barrios están cercados por murallas y alambrados electrificados para aislarse de los excluidos lindantes que no tienen cloacas ni agua potable, ni viviendas aceptables. Un modelo de flagrante crecimiento y exclusión, hasta el momento, indisoluble. En el tema vivienda social, el problema principal no es la construcción, sino el suelo. Los asentamientos crecen porque el suelo es gratis, todos construyen como pueden. En el mercado de la vivienda, los terrenos resultan inalcanzables para la mayoría de la gente. Los planes Pro.Cre.Ar enfrentan hoy el encarecimiento de los terrenos debido justamente al éxito del plan, un sistema de créditos muy bueno, accesible y rápido en su tramitación.

El dilema no es irresoluble, pero no está en vías de solución porque todos los gobiernos (con excepción de los planes de Evita, que construyeron ciudad) siguen transfiriendo al mercado tierras públicas que podrían destinarse a vivienda social y a parques, que también escasean en nuestras ciudades.

El espacio exterior se convierte cada vez más en un escenario para la especulación y las ganancias individuales sin límites. Las tierras y los edificios de

Puerto Madero (170 hectáreas en la costa de la ciudad) eran propiedades colectivas destinadas a paseo público, pero por arte de magia se creó la “Corporación Puerto Madero” (1991), donde crecen los edificios más altos y costosos de la ciudad. El Estado vendió nuestras tierras a precio vil.

El terreno donde se levantó a fines de 1980 –y violando los códigos vigentes– la torre de lujo Le Park, hasta hace poco la más alta de Latinoamérica, era un depósito de tranvías desactivado y fue vendido a particulares. Se desconoce también el destino de los fondos.

Los gobiernos contribuyen a los negocios particulares con infraestructuras pagadas por el Estado. En estos días se discute la construcción de un gigantesco shopping en Caballito contra la voluntad de los vecinos y las organizacionales que defienden la ciudad de tantos atropellos. ¿Cuál sería entonces la relación entre urbanismo y democracia? ¿A quién representan nuestros representantes?

Mientras tanto, la vivienda continúa en estado de “emergencia habitacional” en nuestra ciudad, con 500.000 personas en asentamientos, “hoteles” paupérrimos, casas tomadas, casillas y en la calle.

El espacio exterior se convierte cada vez más en un escenario para la especulación y las ganancias individuales sin límites.

Los sucesivos gobiernos encararon el tema con distintos resultados y alcanzaron un máximo histórico de viviendas construidas durante el período kirchnerista (2003 al 2010): 860.362 unidades que alojan a 3.871.629 personas, pero el déficit sigue creciendo.

1) Se debería imponer a los grandes emprendimientos privados con suelos del Estado, a cambio de sus ganancias, la construcción de vivienda social.

2) El suelo no precisa estar en el piso, también pueden considerarse como suelo los 126.000 edificios vacíos que existen en la CABA.

3) Se necesita del urbanismo y de la participación ciudadana para tener un plan para la ciudad donde quede firmemente establecido dónde se puede edificar viviendas, infraestructura y parques y dónde no, con dibujos y normas.

La primera causa de este divorcio entre la inclusión y el desarrollo de estos grandes emprendimientos inmobiliarios es la nula participación ciudadana en el control de las tierras del Estado que, unida a la codicia individual como único móvil de la conducta empresarial, esencia del capitalismo, genera negocios para unos pocos. Tanto los políticos como el pueblo conciben en forma separada el desarrollo, la economía y su correlato en el hábitat. “Por lo menos da trabajo”, se dice para justificar cualquier desatino como los ya citados o los bares en las plazas. El urbanismo es visto como una cuestión para los “técnicos”. “Yo de arquitectura no entiendo nada”, dicen.

Es necesario comprender que política y urbanismo son la misma cosa, porque todo se desarrolla en el espacio y, en democracia, el espacio nos pertenece.

* Arquitecto, urbanista (PropAmba).



EDUCACIÓN

Treinta años de *luchas*

Por Adriana Puiggrós

Acomienzo de la década de 1970 el sistema escolar argentino necesitaba una reforma en su estructura, sus contenidos y sus métodos de enseñanza. El gobierno de Héctor Cámpora, siendo ministro de Educación Jorge Taiana (p), gestó una transformación de la educación que llegó a los más excluidos. En cuanto a Isabel Perón y luego la última dictadura, no solamente tuvieron como objetivo resguardar los privilegios económicos y sociales, sino que su política educativa reaccionó contra los grandes cambios culturales que sacudían a la sociedad, tanto en las costumbres como por la germinación de una pedagogía heredera de la educación pública, de la educación popular y gratuita del peronismo, de la “escuela activa o escuela nueva” y de la pedagogía de la liberación.

Se restaura el régimen constitucional

El gobierno de Raúl Alfonsín produjo hechos decisivos en la educación: la convocatoria a los juicios de los represores, la democratización de las instituciones educativas y el Congreso Pedagógico nacional, que comprometió al país con educación democrática. Empero, en ese evento hubo consenso en habilitar la consideración tanto de la educación privada como de la pública, lo cual produjo una confusión favorable a un nuevo mercado. Durante más de un siglo los argentinos se habían enorgullecido por mandar a sus hijos a la escuela pública, que era la del Estado; ahora se desdibujaba el campo de lo público, como un preámbulo de lo que ocurriría en la década siguiente. El menemismo dio la espalda a los más caros principios de justicia social y primacía del Estado en la educación, balcanizó el sistema escolar, negando un verdadero federalismo, deterioró las condiciones de trabajo de los docentes y afectó los compromisos de los argentinos con su Nación y su Estado al admitir que las leyes del mercado rigieran la educación pública. No estoy poniendo en duda la legitimidad de las escuelas y universidades privadas. Lo que destaco es el peligro que produce la confusión lingüística y política entre lo público y lo privado que

posibilita descalificar el lugar principal que nuestra Constitución, nuestra tradición educativa y los derechos de nuestro pueblo otorgan al Estado en materia de educación. El cuadro lo completó el gobierno de la Alianza, que traicionó su propio programa y profundizó la crisis. Las luchas encabezadas por los trabajadores de la educación evitaron que se completara la privatización del sistema escolar, como ocurrió en Chile con catastróficas consecuencias. Pero el mercado se inscribió en el discurso de muchos especialistas en educación, economistas devenidos en pedagogos y la gran parte del personal universitario.

La educación en el kirchnerismo

Néstor Kirchner, al asumir la presidencia de la Nación, se encontró con la crisis educativa más profunda de la historia del país y encaró de inmediato la reforma que había fracasado más de treinta años atrás. Lo más importante: pronunció el mensaje pedagógico que más profundamente ha penetrado en la sociedad: la política referida a los derechos humanos, especialmente la reapertura de los juicios a los represores de la última dictadura. Su primera medida de política educativa fue solucionar el conflicto salarial docente; envió al Congreso proyectos que sustituyeron a las leyes de educación neoliberales; estableció una política abierta a las convenciones colectivas de trabajo; llevó el salario docente a un nivel de dignidad, comenzó un extenso programa de construcciones escolares, recuperó la educación técnica, abrió el

Canal Encuentro. El gobierno de la presidenta Cristina F. de Kirchner, además de continuar aquellas políticas sumó llevar el presupuesto educativo a más del 6,50 del PBI; una transformación tecnológica encabezada por el programa Conectar Igualdad; el descenso del analfabetismo a menos del 2 por ciento y la finalización de la educación primaria y secundaria (Programas Fines) de cientos de miles de personas; la creación de nuevas universidades, que se poblaron de cerca de trescientos mil alumnos en tres años, que en su mayor parte son los primeros de su familia que llegan a la universidad.

Lo que falta

Entre los problemas críticos que subsisten: la organización del trabajo docente (acuerdos de mediano plazo sobre incrementos salariales, unificación de cargos, regularización de retribuciones a los suplentes, promoción del trabajo en equipo); capacitación y actualización de los docentes en sus áreas específicas; programas de formación intensiva en puntos cruciales de la escolaridad y, especialmente, formación político-cultural de todos los trabajadores de la educación.

Múltiples y diversas instituciones habitan, sin conformar un sistema, el campo de la educación superior. Hay universidades que han dictado nuevos estatutos que ya no responden a la ley de 1995, aún vigente. El crecimiento y aumento de la complejidad de la educación superior pública y privada es inevitable y preocupante, salvo que se encare una política decidida a planificarla, lo cual no debe ser conflictivo con la autonomía, que tiene rango constitucional. Pero hay que sostener el papel principal de Estado, la gratuidad real de la educación de grado en las sedes centrales y subsedes de las instituciones públicas, vincular las instituciones superiores con la producción y el conjunto de la vida nacional y local, erradicando una autonomía perdida en la lógica del mercado. El Gobierno está a tiempo de cambiar la legislación y de tomar las riendas de la construcción del sistema de educación superior que están demandando la cultura, la sociedad y la economía argentinas.

Las luchas encabezadas por los trabajadores de la educación evitaron que se completara la privatización del sistema escolar, como ocurrió en Chile con catastróficas consecuencias.

HUMOR



La democratización del chiste

Por Pedro Saborido

Escuché muchas veces, aunque no me animo a suscribirlo, que la palabra, en los tiempos en que está prohibida o censurada, puede adquirir las más elegantes formas para sortear ese encierro.

Supongo que con el humor, en 30 años de democracia, pudo haber pasado algo parecido. Dicho esto, con la aclaración de que esa primera idea puede aparecer cuando uno habla del humor en democracia, que es la relación entre el humor y el poder, el humor y los que gobiernan, es algo más cercano a lo que se denomina comúnmente “humor político”.

Mientras en tiempos de dictadura los humoristas jugueteaban con metáforas, guiños, sobreentendidos y todo tipo de gambeta a la censura y al castigo, buscando la complicidad del público, una vez instalada la libertad de expresión, el humor con respecto al poder se hace más directo y puede ir desde lo sofisticado a lo elemental.

Mientras Tato desbordaba de surrealismo alusivo, CQC plantaba a sus noteros a hablarles en la cara, a burlarse en persona, llevando esa burla en representación de toda una audiencia.

Y si antes el humor político quedaba en manos de especialistas (Tato, por ejemplo, cuya carrera televisiva se basó casi exclusivamente en esta marca), con treinta años de democracia al humor político lo puede ejercer desde un fino humorista hasta el más básico contador de chistes.

El humor, tanto el político como el que se basa en otros aspectos de la vida, desborda, como desborda la palabra, después de la dictadura.

Y en el primer agite de la democracia recién estrenada se esparce por todos lados, empieza a hacer parte de todo.

Sin embargo, durante los años de Alfonsín, todavía, en cuanto al humor político, persiste el respeto y lo institucional. Todavía hay elegancia o

recato en cuanto al humor político.

Quizá fue Menem, cuya ruptura del protocolo, sus modos campechanos y cierto pintoresquismo entre exótico y grotesco, quien contribuyó a ese clima en donde el humor político dejó de ser sólo la mirada punzante, el análisis y la ironía justa para sumar la caricatura primitiva, la imitación y el brochazo grueso sobre los personajes de la agenda política.

Por supuesto que los propios políticos ampliaron el rango del humor. Hacia finales de los '80 empezaron a habitar no sólo programas políticos sino también shows televisivos, programas cómicos y todo tipo de experiencias mediáticas, lo que los convirtió en personajes de la tele: ya no tenía que ser humor político, sino humor con políticos.

Esa distancia que desapareció entre el político y el ciudadano, ese pedestal, esa pompa y solemnidad de la que se alejó el político y el funcionario, para mostrarse como “uno más”, como “uno que habla como vos” y que compartía un sillón con Neustadt, con Mirtha, con Susana o con una barra con Calabró, permitió la aparición de un humor político más directo.

Pero el humor en democracia no es sólo la relación del humor y el gobierno. Es también el humor que se planta en otros rubros de la vida. Y desde el humor picaresco hasta el costumbrista, el humor siempre fue una de las primeras avanzadas sobre los cambios culturales.

El hecho de pensar que ver una mujer desnuda en

cine podía conectarse automáticamente con una película de Olmedo y Porcel hace suponer que el humor fue siempre uno de los lugares donde se ensaya aquello que luego será costumbre. Desde la ironía, las formas de hablar, las puteadas, la pérdida de las formalidades, son muchos los avances que encuentran en el humor un lugar de ensayo.

Y así como la metáfora puede perderse cuando no hay censura, el “humor profesional” se desdibuja cuando se lo practica en otros ámbitos. Si habláramos exclusivamente de medios, podemos ver hasta en la forma de escribir de muchos columnistas, en la manera en que, por ejemplo, **Página 12** titula una noticia. Pero también en esos conductores de noticieros que hacen bromas, en los conductores de televisión que dejaron de ser espectros sonrientes de esmoquin, para ser tipos con chispa, transgresión, cancheros e informales, tipos “como vos”, en los técnicos de fútbol, y hasta en los mismos políticos, muchos de los cuales se destacan por su humor, sus ironías hacia el adversario, sus formas piolas y cancheras.

Es decir, al humor en los medios lo empezaron a ejercer todos, o casi todos. Ya no es patrimonio exclusivo del humorista. Y de la misma forma, con la aparición de las redes sociales, el humor también se ejerce de otra manera. Aquel que era humorista en un asado o en una mesa de café, ahora podrá compartir su destreza con miles de personas que ni siquiera conoce.

No creo que haya pasado con el humor algo demasiado distinto de lo que pasó con la palabra en general. Caruso Lombardi o Longobardi pueden hacer un chiste de la misma manera que cualquier humorista lo hace. Un programa de espectáculos puede ser también un programa hecho con humor. Un político puede también ser gracioso o irónico en sus observaciones.

En 30 años se sigue deshaciendo la exclusividad de los humoristas.

No me parece nada mal.

Al humor en los medios lo empezaron a ejercer todos, o casi todos. Ya no es patrimonio exclusivo del humorista.

MEDIOS Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Del Estado a las corporaciones

Por **Damián Loreti**

Preguntarse qué pasó en estos treinta años de democracia en materia de derechos vinculados con la expresión, la información y la comunicación implica analizar las acciones y omisiones de actores estatales y no estatales. Un brevísimos repaso nos coloca frente a una línea de tiempo que comienza en 1984 con la derogación del Código Penal de la dictadura, el fin de la censura cinematográfica y la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A ello se sumó la intervención del directorio militar del Comfer por funcionarios políticos y la suspensión del plan de concursos elaborado por las juntas militares para controlar los medios durante los siguientes 20 años.

de Derechos Humanos terminó con un acuerdo de solución amistosa que derogó esta figura. El Poder Ejecutivo promovió como respuesta inmediata un conjunto de “leyes mordaza” que desembocaron en nuevas denuncias ante la CIDH. Como resultado, la Comisión emite un informe que ilustrará posteriores procesos de despenalización en el continente.

Nada de esto alcanzó para evitar los asesinatos de José Luis Cabezas y Mario Bonino, mientras arreciaban los juicios por calumnias e injurias contra periodistas y se anunciaba desde el gobierno la “ley del palo contra los delincuentes periodísticos”. Mientras tanto, las modificaciones a la ley de radiodifusión de la dictadura por decreto de necesidad y urgencia aumentaron la capacidad de concentración de los grupos mediáticos en un 600 por ciento en una sola no-

prisión por su relato de la Masacre de San Patricio.

Sobre el fin de la década, las radios ya se cuentan por miles, pero hacen falta recursos de amparo para frenar los decomisos de las emisoras no comerciales. A la vez, los derechos de televisación del fútbol se concentran y las pymes del cable se convierten en ciudadanos de segunda frente al fútbol de primera.

Las jornadas del 19 y 20 de diciembre encontraron al gobierno de De la Rúa usando sus últimos reflejos para intentar prohibir las transmisiones en vivo de los noticieros desde la Plaza de Mayo y las principales ciudades del interior. No lo logró: las cámaras registraron la brutal represión que dejó más de treinta muertos en todo el país.

Ya en 2003, junto con una serie de políticas destinadas a transparentar la administración pública, Néstor Kirchner firmó el decreto 1172, la primera norma que garantizó el acceso a la información producida por el Poder Ejecutivo. Más tarde se prohibirán las leyes secretas y se ordenará desclasificar las anteriores.

En 2004 la Coalición por una Radiodifusión Democrática propuso sus 21 puntos para una nueva ley de medios audiovisuales. Son años de acelerada recuperación de derechos para los trabajadores de la comunicación, como parte del proceso general de crecimiento del empleo y la protección social: se restauran los derechos de los canillitas limitando la capacidad de exclusión contra las publicaciones más pequeñas y se reconocen los derechos de imagen de los actores.

Ya con Cristina Fernández en la presidencia se despenalizaron las calumnias e injurias siguiendo el mandato de la Corte Interamericana en el caso Kimel y reconociendo la responsabilidad estatal por la violación de los derechos humanos del periodista. Avanzan en paralelo la declaración de interés público de la producción del papel para periódicos y los foros para debatir el primer proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El proceso dura más de seis meses, participan personas y entidades en todo el país y el texto final se aprueba por amplia mayoría en ambas cámaras. Cuatro años después, las audiencias ante la Corte Suprema vuelven a dar lugar a una discusión sin precedentes sobre qué debe hacer el Estado en materia de libertad de expresión, con los actores sociales en el Palacio de Tribunales y en la calle.

La perspectiva de aplicación integral y simétrica de la LSCA es hoy un desafío central, junto con la entrada en vigencia de las no tan conocidas leyes de acceso a la web para personas con discapacidad y de acceso a la información de los repositorios de investigación científica. Muchas cosas quedan fuera del listado y otras tantas por hacer: ley de acceso, cláusula de conciencia, leyes de publicidad oficial y de subsidio al pluralismo, la expansión de la TDT y la TDA. Pero alcanza con mirar a uno y otro lado de la línea de tiempo —o con encender la televisión y encontrarse con Pakapaka, Encuentro o Tecnópolis TV— para reconocer que las cosas han cambiado en el sentido correcto.



Poco después llegaría el proyecto de radiodifusión del Consejo para la Consolidación de la Democracia junto con el surgimiento de las FM comunitarias —y el combate para mantenerlas abiertas—. Como contracara de este fervor democrático, es necesario recordar el encarcelamiento de Daniel Lupa y otros periodistas por orden del Poder Ejecutivo, sin causa judicial. Este dato también nos permite, treinta años más tarde, comprender la magnitud de los avances alcanzados.

A fines de la década del '80 crece el desarrollo de la industria del cable, aparecen las señales satelitales y, tras la llegada de Carlos Menem al gobierno, se promueve la privatización de los canales a manos de los principales editores de medios gráficos de la Argentina: el Grupo Clarín y Editorial Atlántida. De esta manera, se admiten por primera vez los conglomerados mediáticos y la propiedad cruzada.

En 1992 Horacio Verbitsky fue condenado por desacato y su denuncia en la Comisión Interamericana

che. En Canal 7 se cortan manzanas; en Radio Nacional se rifan los archivos.

Con la reforma constitucional de 1994 se incorporaron los tratados internacionales de Derechos Humanos y el ejercicio del derecho de rectificación fue avalado por los tribunales. También se reconoció judicialmente por primera vez el derecho de acceso a la información en el caso Tiscornia. No obstante, Eduardo Kimel —el periodista que investigó y sacó a la luz los hechos del caso— es sometido a una tortura judicial de una década, para terminar condenado a

La perspectiva de aplicación integral y simétrica de la LSCA es hoy un desafío central.